

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte 2020.

Auto interlocutorio No. 178

MAGISTRADA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTALORA

ASUNTO:	IMPEDIMENTO
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-LABORAL
REFERENCIA:	76001-33-33-014-2016-00236-01
ACCIONANTE:	LUZ MARITZA PALACIOS FLOREZ
ACCIONADO:	NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO:	AUTO QUE DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO DEL JUEZ 14 ADMINISTRATIVO DE CALI

AUTO QUE DECIDE IMPEDIMENTO

Decide la Sala el impedimento manifestado por el juez 14 administrativo de Cali para conocer de la demanda interpuesta por Luz Maritza Palacios Flórez contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

ANTECEDENTES

1. Luz Maritza Palacios Flórez, a través de apoderado judicial y en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Nación – Fiscalía General de la Nación, para que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio DS-06-12-6-SAJ-006 del 05 de enero de 2016 suscrito por el Subdirector de Apoyo a la Gestión de la Seccional Valle del Cauca de la Fiscalía General de la Nación, y la Resolución No. 2-0438 del 01 de marzo de 2016, suscrita por la Subdirectora de Talento Humano de la misma entidad, que le negaron el reconocimiento de la bonificación de servicios como factor salarial.
2. El juez 14 administrativo de Cali se declaró impedido para conocer del asunto, al considerar que tendría un interés directo en las resultas del proceso, toda vez que la bonificación judicial constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Textualmente dijo¹:

(...) El objeto de la demanda en comento es que se inaplique la frase “(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, comprendida en el primer párrafo del artículo 1 del Decreto 0382 de 2013¹, y consecuentemente se declare la nulidad de los actos administrativos que negaron dicho impedimento y se ordene a la demandada reconocer la bonificación judicial como constitutiva de factor salarial para liquidar todas las prestaciones económicas devengadas y las que se causen a futuro y como consecuencia de lo anterior solicita el pago y reliquidación de todas las prestaciones sociales devengadas, debidamente indexadas,

¹ Ver folio nro. 139 y vto.

a partir del 1 de enero de 2013 hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago.

De lo anterior, a pesar de tratarse el presente asunto de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, se evidencia que la naturaleza del medio de control guarda relación directa con respecto a las demandas que se han presentado por los funcionarios de la Rama Judicial, pues lo pretendido es la inaplicación de las normas que establecieron la bonificación judicial producto del Acta de Acuerdo suscrita entre el gobierno y los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación para el 6 de noviembre del año 2012, las cual tuvo como objeto obtener una nivelación en la remuneración en los términos de la ley 4 de 1992.

En este sentido, se tiene que dicho Acuerdo, planteo la disposición de recursos por parte del Gobierno Nacional tanto para la Rama Judicial, como para la Fiscalía General de la Nación, así como también estableció la conformación de una Mesa Técnica Paritaria con el objeto de realizar y aplicar las cifras y montos establecidos en el numeral segundo del convenio, orientados a la nivelación de la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992, mesa que estaría conformada entre otros, por delegados de la antigua Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación y delegados de los funcionarios y empleados de ambas entidades, de lo cual se estableció que finalizados los estudios de la mesa técnica, el Gobierno Nacional emitiría las normas o decretos correspondientes; productos de los cuales no solo se encuentra el acto administrativo solicitado en inaplicación - **Decreto 0382 de 2013**-, sino también el Decreto 0383 de 2013, por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones, lo que para este funcionario constituye la misma fuente normativa, y lejos de ser entidades independientes tanto administrativa, como presupuestalmente, la decisión de fondo al planteamiento de la parte actora constituirá un precedente jurisprudencial favorable o desfavorable respecto de eventuales demandas que se presenten por los Jueces de la República, incluido los jueces de este circuito, para que se liquide todas las prestaciones económicas teniendo como base la bonificación judicial como factor salarial; razón por la cual se podrá ver afectada la imparcialidad del suscrito Juez. (...)

3. Finalmente, señaló que el impedimento comprende a todos los jueces administrativos del circuito de Cali y remitió el expediente a esta Corporación para que decidiera sobre el mismo.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer del impedimento manifestado por el juez 14 administrativo de Cali, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 del CPACA, que prevé:

“Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

(...)

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.”.

2. El caso concreto

Descendiendo al caso bajo estudio, la Sala considera que las pretensiones de la demandante van encaminadas a que, como empleada de la Fiscalía General de la Nación, se reconozca que la bonificación judicial que perciben es factor salarial. Lo anterior lleva a concluir que le asiste la razón al juez 14 administrativo de Cali, toda vez

que, como funcionario de la Rama Judicial, también percibe la bonificación, de tal suerte que al momento de pronunciarse sobre el carácter salarial de dicho emolumento, ello los terminaría beneficiando en forma directa, máxime que dicha bonificación es otorgada no sólo a los servidores del régimen acogido, sino también de los no acogidos independientemente de la vinculación a la Rama Judicial como a la Fiscalía, por lo que la decisión que se profiera en el proceso de la referencia puede afectar su imparcialidad.

Haciendo un análisis comparativo de la situación en que están inmersos tanto los empleados de la Fiscalía General de la Nación, acorde a lo contemplado en el Decreto 382 de 2013 en cuanto al **carácter de la bonificación judicial**, el cual pretende que se tenga en cuenta para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, como para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial a los cuales se les ha establecido una estipulación jurídica similar según lo contenido en el Decreto 383 de 2013 respecto a que **“constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”**, veamos:

RAMA JUDICIAL	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Artículo 1° del Decreto 383 de 2013	Artículo 1° del Decreto 382 de 2013
Artículo 1. Créase para los servidores de la <u>Rama Judicial</u> y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Subrayado y negrillas fuera del texto)	Artículo 1°. Créase para los servidores de la <u>Fiscalía General de la Nación</u> a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto número 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto número 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Subrayado y negrillas fuera del texto)

En conclusión, le asiste la razón al juez 14 administrativo de Cali, toda vez que, como funcionaria de la Rama Judicial, también percibe la bonificación de que trata el Decreto 383 de 2013, por lo que la decisión que se profiera en el proceso de la referencia puede afectar su imparcialidad.

Así mismo, se configura la causal de impedimento manifestada por el juez 14 administrativo de Cali, sobre la totalidad de los jueces administrativos del mismo circuito, debido a que tienen un interés directo en las resultas del proceso, por lo que se debe proceder, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 131 del CPACA, a que por la Presidencia de esta Corporación se realice el sorteo del Conjuez al que se le asignará el conocimiento de la demanda.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento formulado por el juez 14 administrativo de Cali, extensivo a los demás jueces administrativos de Cali, para conocer el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR que por medio de la Presidencia de esta Corporación se realice el sorteo para el nombramiento del conjuer que conocerá el presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada



ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado

*Vobo secretario
lmml*